

**1.8. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA (pp. 2-9)**

—

**1.8. DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
(pp. 10-17)**

JOSÉ LUIS BLASCO DÍAZ

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universitat Jaume I

—

Investigador

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario: 1. Acceso a la información y participación ambiental. 2. Protección de espacios naturales. 2.1. Declaración de nuevos parajes naturales municipales. 2.2. Declaración de microrreservas de flora. 2.3. Declaración de reservas de fauna. 2.4. Aprobación del Plan de Uso Público de la Serra Calderona. 3. Fijación de los periodos hábiles de caza y veda para la temporada 2010-2011. 4. Nueva regulación de los laboratorios de salud pública en el ámbito de la seguridad alimentaria y ambiental. 5. Instrucción técnica para el tratamiento de la vegetación forestal al paso de líneas eléctricas.

1. Acceso a la información y participación ambiental

Con la finalidad de posibilitar las previsiones contenidas tanto en el Convenio de Aarhus como en la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece ampliamente el régimen de su ejercicio. El carácter básico de esta ley permite que las comunidades autónomas también puedan intervenir para posibilitar que tales derechos sean reales y efectivos en su ámbito territorial. Así se motiva en ella, al decir que se limita a establecer las garantías y los principios que han de ser observados por todas las autoridades públicas ante las que se pretendan ejercer los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, sin entrar a regular el procedimiento para su ejercicio.

Esa intervención se ha de producir de acuerdo con las competencias autonómicas de desarrollo de la legislación básica estatal sobre medio ambiente, y, asimismo, con respeto a lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. En este marco, la Generalitat Valenciana ha optado por dictar una norma que desarrolle aquella ley, al igual que han hecho otras comunidades autónomas —no todas—, aunque normalmente en sus leyes de protección del medio ambiente.

De tal modo, el Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, regula el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente en la Comunidad Valenciana (*DOCV* núm. 6290, de 16 de junio de 2010). Así, según se motiva en él, “no aspira tanto a un desarrollo sustantivo de los derechos de acceso a la información y de participación pública en medio ambiente cuanto a la regulación de su ejercicio en consonancia con las modernas teorías organizativas y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información. La normativa básica estatal reguladora de ambos derechos agota prácticamente el campo del

desarrollo legislativo autonómico pero confiere, en cambio, la posibilidad de aplicar las competencias autonómicas en la materia mediante la determinación del marco de ejercicio de esos derechos por los ciudadanos y el establecimiento del contexto organizativo y operativo en el que las autoridades públicas deberán atender con eficacia, diligencia y prestancia las demandas ciudadanas de información y participación en medio ambiente”. En consecuencia, determina como su objeto:

- Regular el ejercicio del derecho de acceso a la información medioambiental generada o recibida por las autoridades públicas, que obre o debiera obrar, en cumplimiento de las obligaciones legales aplicables, en poder de éstas o en el de otras personas públicas o privadas en su nombre, y establecer las condiciones de su ejercicio.
- Garantizar que la información medioambiental, mediante el recurso a la utilización de las nuevas tecnologías de la información, se difunda de manera prioritaria de oficio.
- Establecer las bases que permitan, por medio de las técnicas administrativas de colaboración y coordinación, optimizar los recursos de las distintas autoridades públicas, de forma que se facilite el intercambio fluido de información ambiental.
- Establecer las bases que deben informar el ejercicio del derecho de participación pública en los planes y programas relativos al medio ambiente, así como en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación corresponda a las autoridades públicas.

En este sentido, tras relacionar sus definiciones, regula el derecho de acceso a la información ambiental, siendo relevante el nuevo papel que otorga al ya existente Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDAM) —que centraliza la funciones al respecto—, y su apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, de acuerdo con la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana. Asimismo, crea la Red de Información Ambiental de la Comunidad Valenciana (Red INAM), en la que se integrará, como mínimo, la información de obligada difusión por las diferentes

autoridades públicas, y establece las previsiones básicas de la elaboración de los informes sobre el estado del medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Finalmente, también regula el derecho de participación pública en los procesos de decisión relativos a la elaboración de planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente, imponiendo obligaciones a las autoridades públicas tendentes a garantizar la participación ciudadana en la formación de su voluntad desde el inicio de su elaboración, en consonancia con la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

2. Protección de espacios naturales

2.1. Declaración de nuevos parajes naturales municipales

Una de las figuras de protección que más desarrollo está teniendo en los últimos tiempos en la Comunidad Valenciana es la de los parajes naturales municipales, de los que se han declarado ya cincuenta y cuatro. Con ellos se persigue la preservación de unos espacios naturales de ámbito reducido pero con un elevado valor para las poblaciones locales por sus singularidades o características (ecológicas, paisajísticas, culturales, etc.).

Prevista esta figura de protección en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, se ha desarrollado por el Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell, de Regulación de los Parajes Naturales Municipales, donde se configura su régimen jurídico. Declarados por la Generalitat previa iniciativa de los correspondientes ayuntamientos, a estos corresponde su administración y gestión, de acuerdo con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas naturales, no admitiéndose uso o actividad que ponga en peligro la conservación de los valores que motivan su declaración.

Durante el periodo objeto de nuestra atención, se han declarado cuatro nuevos parajes, por medio de las siguientes normas:

- Decreto 108/2010, de 9 de julio, del Consell, por el que se declara paraje natural municipal el enclave denominado Sierra de Chiva, en el término municipal de Chiva (*DOCV* núm. 6309, de 13 de julio 2010).

- Decreto 111/2010, de 30 de julio, del Consell, por el que se declara paraje natural municipal el enclave denominado la Colaita, en el término municipal de Llombai (*DOCV* núm. 6325, de 4 de agosto 2010).
- Decreto 124/2010, de 3 de septiembre, del Consell, por el que se declara paraje natural municipal el enclave denominado el Barranc de la Fos, en el término municipal de Montesa (*DOCV* núm. 6351, de 9 de septiembre de 2010).
- Decreto 142/2010, de 17 de septiembre, del Consell, por el que se declara paraje natural municipal el enclave denominado Barranco la Hoz, en el término municipal de Enguera (*DOCV* núm. 6360, de 22 de septiembre de 2010).

2.2. Declaración de microrreservas de flora

Por medio del Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano (*DOGV* núm. 2379, de 3 de noviembre de 1994), se creó la figura de protección de especies denominada “microrreserva vegetal”, luego denominada “microrreserva de flora”. Este cambio de denominación lo realizó el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación (*DOCV* núm. 6021, de 26 de mayo de 2009).

Su creación, normalmente, es consecuencia de la comprobación de la situación en que se encuentran determinadas poblaciones vegetales, especialmente las de plantas raras, endémicas o amenazadas, momento a partir del cual se establecen las prioridades para su protección. No en balde, su declaración comporta un plan de gestión, donde se especifican las actuaciones de conservación y las limitaciones de uso, sin perjuicio de que se apliquen otras medidas adicionales de protección y de las prohibiciones generales que puedan establecerse en sus normas de creación (prohibición de salirse de las sendas o caminos existentes, de captura de invertebrados, de recolección de hongos, etc.).

Durante los últimos meses se han creado once de estas microrreservas de flora en la provincia de Alicante, mediante la Orden 11/2010, de 26 de mayo, de la *Conselleria* de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (*DOCV* núm. 6286, de 10 de junio de

2010). Son las siguientes: Banys de la Reina (Calp), Barranc del Trisinal (Jijona), Camarell (Confrides), Cases del Cantal (Benissa), Coll del Ventisquer (Confrides), Cueva Ahumada (Callosa de Segura), Hort dels Frares (Quatretondeta), La Loma (Torrevieja), Salines de Calp (Calp), Serra de Cel·letes (Teulada) y Torretes (Ibi).

2.3. Declaración de reservas de fauna

Mediante el Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, se creó y reguló el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, que establece categorías y normas para la protección de estas especies. En particular, se establece la figura de reserva de fauna, con el fin de dotar de un régimen de protección específico a aquellos espacios de relativamente pequeña extensión que contengan poblaciones excepcionales de especies de fauna silvestre, alberguen temporalmente a algunas de éstas en fases vitales críticas para su supervivencia o sean objeto de trabajos continuos de investigación.

Recientemente se han declarado seis nuevas reservas de fauna, todas ellas a través de la Orden 18/2010, de 26 de agosto, de la *Conselleria* de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (*DOCV* núm. 6351, de 9 de septiembre de 2010), y se han aprobado asimismo sus normas de protección, cuyo contenido está constituido por las limitaciones de uso y las actuaciones de conservación para cada una de ellas (cabe indicar que su gestión es responsabilidad de su propietario bajo supervisión del personal técnico de la Generalitat). Las reservas de fauna declaradas han sido: Finca de Peña (Sagunto), Torretes Font-Roja (Ibi), Finca Buixcarró (Bocairent), Mare de Déu de la Font (Castellfort), Laguna del Cabezo Redondo (Villena) y Nacimiento del Río Cazuma (Bicorp).

2.4. Aprobación del Plan de Uso Público de la Serra Calderona

Con el Decreto 77/2001, de 2 de abril, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Calderona, y el Decreto 10/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano, declaró la Serra Calderona como parque natural, de acuerdo con la Ley

11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

Dado que, según esta ley, una de las finalidades primordiales de los espacios naturales protegidos es el uso social de éstos, en el Decreto 46/2006, de 31 de marzo, del Consell, que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), se prevé la elaboración de un plan de uso público del parque natural. En él se deben contener las determinaciones necesarias para la ordenación y gestión de las actividades ligadas al disfrute ordenado, a la enseñanza y al estudio de los valores ambientales y culturales del parque natural, efectuadas por iniciativa pública, privada o mixta, de conformidad con las directrices que para su elaboración y gestión se contienen en el PRUG.

Concretando lo anterior, la Orden 10/2010, de 20 de mayo, de la *Conselleria* de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (*DOCV* núm. 6278, de 31 de mayo de 2010), aprueba el Plan de Uso Público del Parque Natural de la Serra Calderona, como documento director de la gestión de dicha materia, en el ámbito territorial del citado espacio natural protegido.

3. Fijación de los periodos hábiles de caza y veda para la temporada 2010-2011

La actividad cinegética está regulada en esta comunidad por la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana. Junto con las directrices de ordenación cinegética a las que deben ajustarse los planes de aprovechamiento cinegético de los cotos de caza y otros espacios cinegéticos, establece como referente para esta actividad la orden anual de vedas que debe regular la caza, de manera especial en las zonas comunes.

La importancia de esta última es manifiesta, por cuanto es la que posibilita la práctica de la caza en las zonas comunes, atendiendo a las previsiones de aquella ley tanto en lo relativo al límite de las ocho semanas para la caza con armas, como respecto a la necesidad de la referida orden anual como instrumento de la planificación cinegética que debe asegurar un uso racional de los recursos cinegéticos. Asimismo, la ausencia de directrices de ordenación cinegética determina que en el resto de espacios cinegéticos se deba atender a sus planes técnicos, de los que resulta comúnmente una indefinición

sobre aquellos extremos.

De tal modo, por medio de la Orden 13/2010, de 17 de junio, de la *Conselleria* de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (*DOCV* núm. 6298, de 28 de junio de 2010)¹, se fijan los periodos hábiles de caza y se establecen las vedas especiales para la temporada 2010-2011 en la Comunidad Valenciana, así como las especies susceptibles de aprovechamiento.

4. Nueva regulación de los laboratorios de salud pública en el ámbito de la seguridad alimentaria y ambiental

El Decreto 106/2010, de 25 de junio, del Consell, sobre laboratorios de salud pública en el ámbito de la seguridad alimentaria y ambiental (*DOCV* núm. 6299, 29 de junio de 2010), es una de las medidas para la simplificación que se derivan de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Al mismo tiempo, sustituye la anterior regulación de esta materia por el Decreto 73/2001, de 2 de abril, del Consell, que desarrollaba el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, derogado por el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009. En este sentido, se ha estimado que, tras esa derogación, el Decreto autonómico entraba en conflicto con esta ley, por lo que debía ser derogado de forma expresa, como ahora se hace.

Así, el Decreto 106/2010, al tiempo que revisa la regulación de los laboratorios que realizan sus actividades analíticas en el ámbito de la seguridad alimentaria y ambiental, sobre todo en lo relativo a la autorización e inscripción en el Registro de Laboratorios, también persigue garantizar la calidad de los ensayos que realizan, para lo que establece las condiciones mínimas de funcionamiento.

¹ Corrección de errores en *DOCV* núm. 6304, de 6 de julio de 2010.

Afecta, por lo tanto, a los laboratorios de salud pública, que define como aquellos que llevan a cabo análisis en el campo de la seguridad alimentaria y ambiental, con especial atención a los análisis de contaminantes bióticos y abióticos en alimentos, aguas y aire ambiente. Con el nuevo régimen, estos laboratorios quedan sujetos a la comunicación de inicio de actividad y a la acreditación cuando quieran participar en el control oficial de productos alimenticios de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 882/2004. Asimismo, se determinan las condiciones y los requisitos que deben cumplir, su control y el régimen sancionador que les es de aplicación.

5. Instrucción técnica para el tratamiento de la vegetación forestal al paso de líneas eléctricas

Uno de los riesgos susceptibles de provocar un incendio forestal proviene de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos. Correspondiendo a la Generalitat la planificación, coordinación y ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención y lucha contra los incendios forestales, según la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, su Reglamento, aprobado por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Consell, establece que los titulares de líneas aéreas de conducción eléctrica habrán de mantener limpias de vegetación las zonas de proyección de los conductores, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente sobre la materia.

Por otro lado, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, establece, en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 sobre líneas aéreas con conductores desnudos, diversas previsiones para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea.

Esta concurrencia normativa, al tiempo que plantea algunas dudas conceptuales y terminológicas, evidencia la ausencia de una armonización en el tratamiento de la vegetación forestal en tales supuestos. Ello ha llevado a la Generalitat tanto a la

modificación del reglamento forestal valenciano, para armonizarlo con el Real Decreto mencionado, como a la adopción de unas normas de prevención de incendios forestales de aplicación sistemática en estas situaciones. De tal modo, se ha dictado el Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, y se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales (*DOCV* núm. 6365, de 29 de septiembre de 2010).

Sumari: 1. Accés a la informació i participació ambiental. 2. Protecció d'espais naturals. 2.1. Declaració de nous paratges naturals municipals. 2.2. Declaració de microreserves de flora. 2.3. Declaració de reserves de fauna. 2.4. Aprovació del Pla d'Ús Públic de la Serra Calderota. 3. Fixació dels períodes hàbils de caça i veda per a la temporada 2010-2011. 4. Laboratoris de salut pública en l'àmbit de la seguretat alimentària i ambiental. 5. Instrucció tècnica per al tractament de la vegetació a la zona de protecció de les línies elèctriques.

1. Accés a la informació i participació ambiental

Amb la finalitat de possibilitar les previsions que conté tant el Conveni d'Aarhus com la Directiva 2003/4/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, la Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, estableix àmpliament el règim del seu exercici. El caràcter bàsic d'aquesta llei permet que les comunitats autònomes també puguin intervenir per possibilitar que aquests drets siguin reals i efectius en el seu àmbit territorial. Així s'explica en la mateixa llei, en dir que es limita a establir les garanties i els principis que han d'observar totes les autoritats públiques davant les quals es pretenguin exercir els drets d'accés a la informació, la participació i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, sense entrar a regular el procediment per exercir-los.

Aquesta intervenció s'ha de produir d'acord amb les competències autonòmiques de desplegament de la legislació bàsica estatal sobre medi ambient, i, així mateix, pel que fa al que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució. En aquest marc, la Generalitat Valenciana ha optat per dictar una norma que desplegui la llei, com han fet altres comunitats autònomes —no totes—, tot i que normalment en les lleis de protecció del medi ambient.

D'aquesta manera, el Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana (*DOCV* núm. 6290, de 16 de juny de 2010). Així, segons els motius que exposa, “no aspira tant al desplegament substantiu dels drets d'accés a la informació i de participació pública en medi ambient quant a la regulació del seu exercici d'acord amb les modernes teories organitzatives i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació. La normativa bàsica estatal reguladora d'ambdós

drets esgota pràcticament el camp del desplegament legislatiu autonòmic, però confereix, en canvi, la possibilitat d'aplicar les competències autonòmiques a la matèria mitjançant la determinació del marc d'exercici d'aquests drets pels ciutadans i l'establiment del context organitzatiu i operatiu en el qual les autoritats públiques han d'atendre amb eficàcia, diligència i excel·lència les demandes ciutadanes d'informació i participació en medi ambient". En conseqüència, determina com a objecte seu:

- Regular l'exercici del dret d'accés a la informació mediambiental generada o rebuda per les autoritats públiques, que obri o hagi d'obrir, en compliment de les obligacions legals aplicables, en poder seu o en el d'altres persones públiques o privades en nom seu i establir les condicions de l'exercici seu.
- Garantir que la informació mediambiental, mitjançant el recurs a la utilització de les noves tecnologies de la informació, es difongui de manera prioritària d'ofici.
- Establir les bases que permetin, per mitjà de les tècniques administratives de col·laboració i coordinació, optimitzar els recursos existents en les diferents autoritats públiques, i facilitar l'intercanvi fluid d'informació ambiental.
- Establir les bases que han d'informar l'exercici del dret de participació pública en els plans i programes relatius al medi ambient, així com en els procediments per a la presa de decisions sobre afers que incideixin directament o indirectament en el medi ambient i l'elaboració o aprovació de les quals correspongui a les autoritats públiques.

En aquest sentit, després de relacionar les seves definicions, regula el dret d'accés a la informació ambiental, i és rellevant el nou paper que atorga a l'existent Centre d'Informació i Documentació Ambiental (CIDAM) —que centralitza les funcions des d'aquest punt de vista—, i la seva aposta per aplicar noves tecnologies de la informació, d'acord amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Així mateix, crea la Xarxa d'Informació Ambiental de la Comunitat Valenciana (Xarxa INAM), la qual integra, com a mínim, la informació de difusió obligada per les diferents autoritats públiques, i estableix les previsions bàsiques d'elaboració dels informes sobre l'estat del medi ambient a la Comunitat Valenciana. Finalment, també regula el dret de participació pública en els processos de decisió relatius a l'elaboració de plans, programes i disposicions de

caràcter general relacionats amb el medi ambient, i imposa obligacions a les autoritats públiques tendents a garantir la participació ciutadana en la formació de la seva voluntat des de l'inici de la seva elaboració, d'acord amb la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

2. Protecció d'espais naturals

1.1. Declaració de nous paratges naturals municipals

Una de les figures de protecció més desplegades en els últims temps a la Comunitat Valenciana és la dels paratges naturals municipals, dels quals se n'han declarat ja 54. Amb això es persegueix preservar uns quants espais naturals d'àmbit reduït però amb elevat valor per a les poblacions locals, per les singularitats o característiques (ecològiques, paisatgístiques, culturals, etc.).

Prevista aquesta figura de protecció en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, s'ha desplegat pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals, en què es configura el seu règim jurídic. Declarats per la Generalitat prèvia iniciativa dels ajuntaments corresponents, els toca administrar-los i gestionar-los, d'acord amb la finalitat de protegir la integritat dels ecosistemes naturals, sense admetre cap ús o activitat que posi en perill la conservació dels valors que motiven la declaració.

Durant el període objecte de la nostra atenció, s'han declarat quatre paratges nous, per mitjà de les normes següents:

- Decret 108/2010, de 9 de juliol, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament anomenat Sierra de Chiva, al terme municipal de Xiva (*DOCV* núm. 6309, de 13 de juliol de 2010).
- Decret 111/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament anomenat la Colaita, al terme municipal de Llombai (*DOCV* núm. 6325, de 4 d'agost de 2010).
- Decret 124/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament anomenat el Barranc de la Fos, al terme municipal de Montesa (*DOCV* núm. 6351, de 9 de setembre de 2010).

- Decret 142/2010, de 17 de setembre, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament anomenat Barranco la Hoz, al terme municipal d'Enguera (*DOCV* núm. 6360, de 22 de setembre 2010).

2.2. Declaració de microreserves de flora

Per mitjà del Decret 218/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià (*DOGV* núm. 2379, de 3 de novembre de 1994), es va crear la figura de protecció d'espècies anomenada microreserva vegetal, després anomenada microreserva de flora. Aquest canvi de nom el va realitzar el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació (*DOCV* núm. 6021, de 26 de maig de 2009).

La seva creació, normalment, és conseqüència de la comprovació de la situació en què es troben determinades poblacions vegetals, especialment la de plantes rares, endèmiques o amenaçades, i a partir d'aquest moment s'estableixen prioritats per protegir-les. No debades, la declaració comporta un pla de gestió, on s'especifiquen les actuacions de conservació i les limitacions d'ús, sense perjudici que s'apliquin altres mesures addicionals de protecció i de les prohibicions generals que puguin establir-se en les normes de creació (prohibició de sortir de les senderes o camins existents, de capturar invertebrats, recol·lectar de fongs, etc.).

Durant els últims mesos, de microreserves de flora se n'han creat onze, a la província d'Alacant i al mateix temps, mitjançant l'Ordre 11/2010, de 26 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (*DOCV* núm. 6286, de 10 de juny de 2010). Són les següents: Banyes de la Reina (Calp), Barranc del Trisinal (Xixona), Camarell (Confrides), Cases del Cantal (Benissa), Coll del Ventisquer (Confrides), Cueva Ahumada (Callosa de Segura), Hort dels Frares (Quatretondeta), La Lloma (Torrevella), Salines de Calp (Calp), Serra de Cel·letes (Teulada) i Torretes (Ibi).

2.3. Declaració de reserves de fauna

Mitjançant el Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, es va crear i regular el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades, i es van establir categories i normes per protegir-les. En particular, s'estableix la figura de reserva de fauna, a fi de dotar de règim de protecció específic els espais de relativa petita extensió que continguin poblacions excepcionals d'espècies de fauna silvestre, n'acullin algunes en fases vitals crítiques per sobreviure o siguin objecte de treballs continus d'investigació.

Recentment s'han declarat sis reserves de fauna noves, totes mitjançant l'Ordre 18/2010, de 26 d'agost, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (*DOCV* núm. 6351, de 9 de setembre de 2010), i se n'ha aprovat així mateix les normes de protecció, el contingut de les quals està constituït per les limitacions d'ús i actuacions de conservació de cadascuna (cal indicar que la gestió és responsabilitat del propietari sota la supervisió del personal tècnic de la Generalitat). Les reserves de fauna que s'han declarat són: Finca de Peña (Sagunt), Torretes Font-roja (Ibi), Finca Buixcarró (Bocairent), Mare de Déu de la Font (Castellfort), Laguna del Cabezo Redondo (Villena) i Naixement del Riu Cazuma (Bicorb).

2.4. Aprovació del Pla d'Ús Públic de la Serra Calderona

Amb el Decret 77/2001, de 2 d'abril, es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, amb la qual cosa el Decret 10/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, va declarar la Serra Calderona com a parc natural, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.

Atès que, segons aquesta Llei, una de les finalitats primordials dels espais naturals protegits és l'ús social, en el Decret 46/2006, de 31 de març, del Consell, que aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), es preveu elaborar un pla d'ús públic del parc natural. El pla ha de contenir les determinacions necessàries per ordenar i gestionar les activitats lligades al gaudi ordenat, a l'ensenyament i a l'estudi dels valors ambientals i culturals del parc natural, efectuades per iniciativa pública, privada o mixta, de conformitat amb les directrius que conté el PRUG per elaborar-les i gestionar-les.

Concretant les qüestions anteriors, l'Ordre 10/2010, de 20 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (*DOCV* núm. 6278, de 31 de maig de 2010), aprova el Pla d'Ús Públic del Parc Natural de la Serra Calderona, com a document director de la gestió d'aquesta matèria, en l'àmbit territorial de l'espai natural protegit esmentat.

3. Fixació dels períodes hàbils de caça i veda per a la temporada 2010-2011

La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana regula l'activitat cinegètica en aquesta comunitat. Al costat de les directrius d'ordenació cinegètica a què han d'ajustar-se els plans d'aprofitament cinegètic dels vedats de caça i altres espais cinegètics, estableix com a referent per a aquesta activitat l'ordre anual de vedes que ha de regular la caça, de manera especial a les zones comunes.

La importància d'aquesta última és evident, ja que és la que possibilita la pràctica de la caça a les zones comunes, atenent les previsions de la llei tant pel que fa al límit de les vuit setmanes per caçar amb armes, com a la necessitat de l'ordre anual esmentada com a instrument de la planificació cinegètica que ha d'assegurar l'ús racional dels recursos cinegètics. Així mateix, l'absència de directrius d'ordenació cinegètica determina que en la resta d'espais cinegètics s'ha d'atendre els plans tècnics, dels quals en resulta comunament la indefinició sobre els extrems.

D'aquesta manera, per mitjà de l'Ordre 13/2010, de 17 de juny, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (*DOCV* núm. 6298, de 28 de juny de 2010), es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 2010-2011 a la Comunitat Valenciana, així com les espècies susceptibles d'aprofitament.

4. Nova regulació dels laboratoris de salut pública en l'àmbit de la seguretat alimentària i ambiental

El Decret 106/2010, de 25 de juny, del Consell, sobre laboratoris de salut pública en l'àmbit de la seguretat alimentària i ambiental (*DOCV* núm. 6299, 29 de juny de 2010)², és una de les mesures per simplificar que porten conseqüència en la Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

Al mateix temps, substitueix l'anterior regulació d'aquesta matèria pel Decret 73/2001, de 2 d'abril, del Consell, que desplega el Reial decret 202/2000, d'11 de febrer, derogat pel Reial decret 109/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen uns quants reials decrets en matèria sanitària per adaptar-se a la Llei 17/2009. En aquest sentit, s'ha estimat que després d'aquesta derogació, el decret autonòmic entrava en conflicte amb aquesta llei, per la qual cosa s'havia de derogar de forma expressa, com es fa ara.

Així, el nou Decret 106/2010, alhora que revisa la regulació dels laboratoris que realitzen activitats analítiques en l'àmbit de la seguretat alimentària i ambiental, sobretot pel que fa a l'autorització i a la inscripció en el Registre de Laboratoris, també persegueix garantir la qualitat dels assajos, i n'estableix les condicions mínimes de funcionament.

Per tant, afecta els laboratoris de salut pública, que defineix com els que realitzen anàlisis en l'àmbit de la seguretat alimentària i ambiental amb especial atenció a les anàlisis de contaminants biòtics i abiòtics en els aliments, l'aigua i aire ambient. Amb el nou règim, aquests laboratoris estan subjectes a la comunicació d'inici d'activitat i a l'acreditació quan vulguin participar en el control oficial de productes alimentaris d'acord amb el Reglament (CE) núm. 882/2004. Així mateix, es determinen les condicions i els requisits que han de complir, el control i el règim sancionador que els és aplicable.

5. Instrucció tècnica per al tractament de la vegetació forestal al pas de línies elèctriques

² Correcció d'errades al *DOCV* núm. 6304, de 6 de juliol de 2010.

Un dels riscos susceptibles de provocar un incendi forestal prové de les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus. Atès que correspon a la Generalitat planificar, coordinar i executar les mesures i accions necessàries per prevenir incendis forestals i lluitar-hi en contra, segons la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, el Reglament, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, estableix que els titulars de línies aèries de conducció elèctrica han de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria.

D'altra banda, el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual es van aprovar el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, estableix, en la Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 sobre línies aèries amb conductors nus, unes quantes previsions per evitar interrupcions del servei i possibles incendis produïts pel contacte de branques o troncs d'arbres amb conductors d'una línia elèctrica aèria.

Aquesta concurrència normativa, alhora que planteja uns quants dubtes conceptuals i terminològics, evidencia l'absència d'harmonització en el tractament de la vegetació forestal en aquests supòsits. Això ha portat la Generalitat tant a modificar el Reglament forestal valencià, per harmonitzar-lo amb el reial decret esmentat, com a adoptar normes de prevenció d'incendis forestals d'aplicació sistemàtica en aquestes situacions. D'aquesta manera, s'ha dictat el Decret 150/2010, de 24 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, i s'aprova la Instrucció tècnica IT-MVLAT per al tractament de la vegetació a la zona de protecció de les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus al seu pas per terrenys forestals (*DOCV* núm. 6365, de 29 de setembre de 2010).